

El proceso judicial electrónico. Requisitos para su formación. Comunicaciones y plazos

Antonio Luis Valero Canales

Letrado de la Administración de Justicia

Resumen: *El presente trabajo tiene por objeto ofrecer un primer estudio de los problemas procesales que surgen tras la implantación de un proceso judicial enteramente electrónico. Situamos la cuestión partiendo de los principios que debe informar la construcción de un proceso de estas características, y realizamos un análisis jurídico de los distintos problemas técnicos que su adecuada formación comporta. Evaluamos los supuestos que pueden provocar la inadmisión del proceso por defectos técnicos, a los que la ley ha atribuido la misma importancia que los tradicionales impedimentos procesales. Vemos la doble perspectiva de presentación electrónica de escritos y de comunicaciones electrónicas emanadas de la oficina judicial, y por último contemplamos el diferente tratamiento jurídico que presenta el cómputo de plazos procesales en función del destinatario y de la forma de comunicación. En definitiva, estamos ante una diferente forma de concebir el proceso, llena de expectativas y nuevos retos que habrá que ir afrontando en la forma y manera en que se presenten.*

Palabras clave: Proceso electrónico, defectos técnicos, escritos y comunicaciones electrónicas.

I. Introducción

La introducción de las tecnologías de la información y comunicación (en adelante, TIC) en el proceso judicial tiene lugar por primera vez con la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, de reforma de la LOPJ, que en su art. 230 estableció la posibilidad de utilización de tales medios en el proceso.

Más tarde, tuvo un avance significativo con la actual LEC, la cual recoge en los arts. 146 y 147 la grabación de la imagen y sonido de los juicios y vistas, que se ha extendido a todos los órdenes jurisdiccionales. También en el art. 299.2 LEC se recogen como medios de prueba los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, y los instrumentos que permitan archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas.

Pero el instrumento legislativo más importante a la hora de idear un proceso judicial electrónico tuvo lugar con la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de Justicia, pues por primera vez se alude a la existencia del mismo.

Esta ley, no carente de ambición, manifestaba en su Exposición de Motivos su intención de generalizar el uso de las TIC dentro del proceso, estableciendo la obligatoriedad de su utilización, tanto para los profesionales de justicia, como para los integrantes de los órganos judiciales y fiscales, hasta llegar a la existencia de un proceso judicial enteramente electrónico.

Sucesivas reformas legales han ido estableciendo los mecanismos legales y tecnológicos necesarios para que hoy pueda ya existir el proceso judicial electrónico. Es determinante en dicha evolución la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que modificó la LEC, pues según su Exposición de Motivos: «constituye una necesidad imperiosa acometer una reforma en profundidad de las diferentes actuaciones procesales para generalizar y dar mayor relevancia al uso de los medios telemáticos o electrónicos, otorgando carácter subsidiario al soporte papel».

No obstante, los retos que presenta tal reforma estructural del proceso exige que dichas modificaciones se sigan efectuando, pues el derecho a la tutela judicial efectiva que late en el propio concepto del proceso judicial, debe permitir articular un conjunto ordenado, sistemático y completo de normas que permita a los ciudadanos y a los profesionales e intervinientes en el proceso ejercitar sus derechos con total garantía jurídica, con indiferencia del soporte que le sirvan de base.

Ello obliga a afrontar una adecuación y sintonía entre los medios tecnológicos disponibles a la hora de configurar el expediente judicial electrónico, y los medios normativos que sirven de soporte legal a los mismos. Es una realidad que preceptos legales existentes no pueden ser llevados a efecto por la inexistencia de herramientas informáticas adecuadas (1).

El derecho a la tutela judicial efectiva que late en el propio concepto del proceso judicial debe permitir articular un conjunto de normas que permita a ciudadanos y profesionales ejercitar sus derechos con total garantía jurídica, al margen del soporte que le sirvan de base

Y constituye una necesidad la clarificación del grado de implantación del expediente judicial electrónico en cada uno de los partidos judiciales del Estado. Es notoria la falta de una normativa administrativa dirigida desde el Ministerio de Justicia (2), con la aquiescencia del C.G.P.J., que vaya estableciendo con instrumentos normativos concretos, dónde está efectivamente implantado y a partir de qué concreta fecha, pues su desconocimiento añade un margen mayor de incertidumbre a los ciudadanos y a los profesionales de la justicia.

Por último, conviene hacer una precisión terminológica. El presente trabajo se refiere al proceso judicial electrónico, pero la Ley 18/2011 el término que recoge es el de expediente judicial electrónico al que define en el art. 26, como: «conjunto de datos, documentos, trámites y actuaciones electrónicas, así como de grabaciones audiovisuales correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga y el formato en que se hayan creado».

De este modo, el expediente viene referido a los datos y actuaciones que integran el proceso, pero como este estudio debe estar enfocado a los presupuestos procesales y a las consecuencias de este tipo que conlleva su formación, la expresión adecuada es hablar del proceso, no del expediente, pues el proceso judicial sigue existiendo, sea cual sea el soporte en que se presenten las actuaciones, como garantía que es del ejercicio del derecho fundamental a tutela judicial efectiva, aunque nos referiremos a uno y otro concepto indistintamente.

II. Principios para su formación

En la configuración del proceso judicial electrónico la formación de los llamados «autos», a los

que se refiere el art. 454.1 LOPJ, cambia radicalmente respecto de la tradicional formación en papel. Dicho cambio afecta no solo al soporte que le sirve de base, sino que ha transformado la manera cómo nos relacionamos y los retos que afrontamos en su confección.

No obstante, el proceso judicial sigue siendo enteramente igual. Consiste en un conjunto de actos legalmente reglados y ordenados cronológicamente de los distintos intervinientes: partes, profesionales, terceros, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, jueces, etc., a través del cual se ejercita el derecho a la tutela judicial efectiva y se resuelven los conflictos mediante la aplicación del derecho.

Es decir, presenta retos y perspectivas diferentes, pero los derechos que laten en el proceso son los mismos, y por ello, debemos encarar su estudio en base a los mismos principios que lo sustentan.

Es evidente que en el proceso judicial electrónico la formación de los «autos» presenta una mayor complejidad. El papel puede ser asido, movido y colocado en un lugar determinado mediante el simple uso de nuestra voluntad. Un expediente electrónico consta de archivos electrónicos que no podemos mover, cambiar ni colocar de forma diferente a la que se encuentran. Su comprensible rigidez constituye un reto para su formación ordenada.

Por ello, debemos extremar las cautelas a la hora de su confección, pues un marasmo de archivos electrónicos desordenados, innominados y aleatoriamente dispuestos haría inviable el ejercicio de los derechos y la resolución de los conflictos planteados. Recordemos la máxima de que «el orden es la primera ley del cielo».

El reto es, por tanto, tratar de llevar el orden del proceso en soporte papel al orden digital.

En dicho tránsito debemos regirnos, a mi juicio, por los siguientes principios:

1. Integridad

El proceso judicial electrónico, al igual que el confeccionado en soporte papel, debe estar íntegro, es decir, debe recoger la totalidad de las actuaciones judiciales, y debe pretender que este conjunto de actuaciones consecutivas estén recogidas en un formato electrónico.

Recordemos el viejo adagio tantas veces utilizado en el foro: «lo que no está en los autos no está en el mundo». Con ello se alude, por un lado, a la pretensión de totalidad que abarca el proceso, en cuanto que recoge todo lo ocurrido durante su tramitación, y por otro, por vía de exclusión, supone que no puede servir para sustentar su resolución nada que no forme parte de sus actuaciones.

Esa doble perspectiva tradicional de proceso en papel debe trasladarse al proceso electrónico.

Pero, debemos preguntarnos si tal premisa era así de forma terminante antes de la existencia del proceso judicial electrónico.

Los cambios no se producen enteramente de un día para otro. El ilustre penalista Pacheco (3) al referirse al *iter criminis*, manifestaba que el delito no surge a la realidad de la vida, como Minerva, de repente y totalmente completo.

Del mismo modo, desde la aparición de las TIC en el proceso, éste ha ido incorporando actuaciones que no estaban en soporte papel, pues ello no resultaba posible o viable (grabaciones de vistas), o que no se imprimían, pues ya constaban en los soportes informáticos de gestión procesal (las notificaciones electrónicas, por ejemplo).

Ello permite afirmar que aunque el proceso no era electrónico, sí existían actuaciones procesales electrónicas, que no se trasladaban al papel por imposibilidad o conveniencia.

¿Significa esto que el proceso no era íntegro?. A mi juicio no debe llegarse a esa conclusión. El proceso era íntegro, aunque el propósito de foliar los autos, como modo de recoger de forma omnicomprendiva su totalidad, resultaba en ocasiones estéril, pues podían existir acontecimientos no traspadados al papel.

No obstante, a la hora de elaborar un proceso judicial electrónico debemos invertir el método. La mayor parte de las actuaciones procesales nacen en formato electrónico y se conservan en dicho formato. Pero hay algunas que no, y dichas actuaciones deben pasar a formato electrónico y

situarse secuencialmente en su lugar cronológico.

La integridad del expediente electrónico requiere que un documento que se presenta en formato papel se integre mediante su escaneo, que la grabación de la vista se incorpore al expediente. Todo esto que no era posible cuando los «autos» se conformaban en papel, ya sí es posible para uno electrónico.

Pese a ello, habrá supuestos que lleguen al proceso objetos que no pueden ser escaneados o informáticamente incorporados: un plano presentado en papel, una radiografía presentada físicamente, etc. En estos casos, la ley prevé una solución. El art. 135.4 LEC y 38.2 d) y e) Ley 18/2011, establecen que de dichos documentos se dejará constancia en el expediente judicial electrónico.

Es decir, en el momento de su aportación física se pondrá una diligencia de constancia en el expediente electrónico que permita conocer su existencia, y acudir a su lugar de custodia para instruirse del mismo, cuando sea necesario.

La integridad del proceso electrónico es un propósito incuestionable, aunque su acreditación no resulte de su foliado. El art. 26.3 Ley 18/2011 establece que el foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico. En el mismo sentido el art. 273.4 LEC.

En cualquier caso, la referencia que antes se hacía al dictar la resolución final aludiendo al documento por su número de folio, puede quedar sustituida por el número de acontecimiento que presenta en el expediente electrónico.

2. Autenticidad

Otra garantía sustancial del proceso es que su integración se realice en base a documentos o actuaciones auténticos, es decir, que respondan fielmente en cada caso al contenido de lo actuado.

En soporte papel, ello suponía que el documento formaba parte del expediente si había sido presentado y firmado por las partes o los profesionales personados, o las resoluciones firmadas o testimoniadas por los integrantes del órgano judicial, o aportado o presentado por otras vías legítimas. Todo aquello que estuviera en borrador o fueran folios separados utilizados como resúmenes o guías no formaba parte del proceso. En puridad, no se hallaba unido a las actuaciones.

En soporte digital, pueden existir también borradores de resoluciones o actuaciones indebidamente contenidas por error, que no forman parte del proceso, y que conviene hacer desaparecer del mismo. Ello obliga a extremar las cautelas, y eliminar lo improcedente e inútil, y sobre todo, no utilizar las herramientas informáticas como tratamientos de textos, sino para incluir resoluciones definitivas.

En todo caso, el art. 27 de la Ley 18/2011 prevé lo que haya de considerarse como documento judicial electrónico, e incluye tanto las resoluciones y actuaciones realizadas en los sistemas de gestión procesal como toda información remitida al expediente, siempre y en ambos casos, que esté firmada electrónicamente.

Es decir, la firma electrónica reconocida es la establecida para la presentación de escritos por vía electrónica (arts. 267, 268, 273.4, LEC; art.36.3 Ley 18/2011). El art. 17.2 Real Decreto 1065/2015 habla de firma electrónica cualificada (4) . Respecto de los integrantes de órganos judiciales y fiscales, el art. 21 Ley 18/2011 se refiere a la firma electrónica en general, que en los arts. 27.3 Ley 18/2011 y 146 y 147 LEC se concreta en firma electrónica reconocida. (5)

Ello permite asegurar la integridad y autenticidad de las actuaciones electrónicas que conforman el proceso, impidiendo su modificación o alteración (6) .

En realidad, lo que pasa a conformar el proceso judicial electrónico es exclusivamente lo que constituye un documento o actuación definitivo: una vista grabada y firmada electrónicamente, una resolución firmada electrónicamente, un escrito de parte presentado y firmado electrónicamente. Es decir, todo aquello que pueda tener un carácter definitivo, perdurable e inmodificable (7) .

3. Cronología

Antes nos referíamos al proceso electrónico como un conjunto de actos legalmente reglados y ordenados cronológicamente.

El proceso sigue un «iter» secuencial de carácter temporal, y es obvio que las distintas actuaciones procesales deban ser recogidas en el momento de su realización.

La formación secuencial en un expediente en papel es sencilla, pues puede ser ordenada mediante la colocación manual de los trámites en su orden temporal concreto. Para evitar futuras manipulaciones existía el foliado de las actuaciones.

El proceso electrónico plantea una mayor dificultad, pues dicha confección ya no es exclusiva de la oficina judicial, dirigida por el Letrado de la Administración de Justicia, conforme al art. 454.1 L.O.P.J., sino que estamos ante un proceso que se nutre por aportaciones sucesivas de los distintos intervinientes, y que ocupan el lugar que el remitente les haya dado en su envío. Por poner un ejemplo, un juicio ordinario civil se inicia por la remisión de un procurador vía LexNET en que la posición de la demanda y los documentos que la acompañan viene determinada por la que le haya otorgado dicho procurador (8). Ello permite que no se manden cronológicamente ordenados, e incluso que la demanda no ocupe el primer lugar. Ello no puede ser alterado por la oficina judicial con posterioridad. O incluso, que el sistema no permita el envío completo por falta de capacidad del sistema (art. 18 Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre), lo que con posterioridad producirá un volcado en el sistema de gestión procesal, lo que no es seguro que respete estrictamente un orden cronológico.

Estas y otras muchas cuestiones pueden ocasionar que se pierda la secuencia temporal de los acontecimientos procesales.

Como a los archivos electrónicos no se les puede cambiar de posición, las cautelas y buenas prácticas de las oficinas judiciales, y la cultura de una nueva forma de proceder por parte de los profesionales es esencial a la hora de conseguir una adecuada formación del expediente.

Son nuevos retos que obligan a dedicar a las cuestiones tecnológicas un tiempo valioso que antes se limitaba a cuestiones estrictamente legales.

No obstante, el impulso de dichas tecnologías en todas las áreas de la actividad humana ha llegado a la Administración de Justicia, y nuestro estudio debe afrontar todos estos nuevos retos que el ritmo de los tiempos impone.

4. Seguridad

La utilización de las TIC en cualquier área humana supone plantearse la cuestión de dotar de seguridad al sistema. Ello ocurre también en el ámbito de la Administración de Justicia (9).

Por ello, el término seguridad se repite a lo largo de la ley, para garantizar la seguridad y confidencial de los datos (arts. 4.2.g y 6.2.e Ley 18/2011, y art. 230.4 LOPJ); de los soportes que los contengan (art. 29.3 Ley 18/2011); de los entornos cerrados de comunicaciones o de atención telefónica (24.4 y 5.2 d Ley 18/2011); en la presentación de escritos y documentos y seguridad en las comunicaciones (arts. 31.2, 33.4 y 36.1 Ley 18/2011); y sobre todo, en la creación del Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad a que se refiere el Capítulo II del Título V Ley 18/2011.

Dichos parámetros de seguridad se reproducen en el Real Decreto LexNET.

Para hacer efectiva dicha seguridad se utiliza también la firma electrónica reconocida para la presentación documental y la elaboración de las resoluciones procesales, como vimos anteriormente. Ello genera documentos seguros y no manipulables con posterioridad.

Es más, la totalidad de dichas resoluciones cuenta con un código seguro de verificación, que permite la atribución de la firma al firmante y la acreditación de la autenticidad del documento (arts. 11.2 h, 19.1 b Ley 18/2011; 6.2 Real Decreto LexNET).

Debemos constatar el cambio sustancial que produce en este punto el expediente digital. El reto para una Administración de Justicia en «papel» era el de la transparencia. La documentación está en su totalidad y de modo único en la oficina judicial competente y para su acceso es necesaria una

actividad presencial del interesado, lo que permite un acceso controlado a las actuaciones. Por ello, en este caso, la problemática ha pivotado en reclamar un mayor y más fácil acceso al interesado para dar cumplimiento a los arts. 234, 235, 454.4 LOPJ.

En cambio, en los entornos digitales la información puede circular con enorme rapidez, pues una vez que alguien tiene en su poder una resolución judicial, o incluso un proceso completo de carácter electrónico, su envío o transmisión puede ser instantáneo y a un número indeterminado de destinatarios, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad en torno al proceso (10), en aras a impedir la difusión de datos confidenciales y proteger la privacidad de los intervinientes.

Compatibilizar seguridad y transparencia es el reto de nuestro tiempo, y ello ha de trasladarse también al ámbito de la Administración de Justicia.

III. Inicio del proceso

1. Proceso participativo

Como vimos en epígrafes precedentes, la formación del proceso electrónico no es solo fruto de la actividad de la oficina judicial, aunque sobre la misma siga radicando la máxima responsabilidad.

El proceso como fruto de la actividad de todos los agentes intervinientes en el mismo se aprecia con mucha mayor claridad en un entorno digital. Cada uno de los actos o documentos que lo integran tiene una procedencia distinta y en él intervienen los ciudadanos, los profesionales de la justicia, testigos o peritos, Administraciones, integrantes de la oficina judicial o fiscal, etc.

En un entorno en papel, los documentos y actuaciones que lo integran son ordenados e integrados en el proceso por los funcionarios de dicha oficina.

En un entorno digital, las personas físicas pueden presentar documentos en papel que se escanean, las personas jurídicas presentar sus documentos en formato electrónico a través de la sede judicial electrónica, los profesionales de la justicia a través de LexNET, los peritos sus informes en soportes electrónicos que se incorporan al proceso (art. 346 LEC), los integrantes de las oficinas judiciales o fiscales las resoluciones o escritos, etc. Todos estos documentos deben cumplir unos estándares en su presentación, confección y transmisión, cuyo incumplimiento puede suponer su inadmisión.

La imposibilidad de mover dichos documentos para colocarlos de forma ordenada y cronológica y el cumplimiento de los requerimientos técnicos de los mismos, que en el papel no eran precisos, determina que la participación de cada uno de los intervinientes del proceso tenga una trascendencia fundamental.

Por ello, en la actualidad puede observarse que la participación de todos en el proceso conforma el mismo proceso y determina la admisibilidad de los documentos y su exclusión. Exclusión que no permite su salida del expediente, sino que precisa de alguna resolución que lo establezca, y de mecanismos continuos de subsanación. Esto engrosa el tamaño del expediente con acontecimientos carentes de valor y eficacia pero que constan en el mismo.

De este modo, estamos ante un «proceso judicial» participativo, que puede ofrecer paralelismos con el art. 124 CE, aunque con distinto contenido.

2. Presentación electrónica de escritos y documentos

El proceso suele comenzar con el envío electrónico de su escrito iniciador. Nos referiremos con carácter general al proceso civil, por el carácter supletorio que tiene en los demás órdenes jurisdiccionales (art. 4 LEC), aunque el expediente judicial afecte a todas las demás jurisdicciones.

La presentación de la demanda inicial del proceso con sus documentos realizada por un profesional de la justicia habrá de hacerse por medios telemáticos (arts. 6 y 36.3 Ley 18/2011, arts. 135.1, 267, 268 y 273.1 LEC, art. 5 Real Decreto 1065/2015). Son profesionales de la justicia los colectivos a que se refiere el art. 2 b) del Real Decreto 1065/2015 LexNET (11). El Anexo II de dicho Real Decreto establece la relación de usuarios de LexNET, para los que constituye obligación legal su utilización. Es decir, los profesionales de la justicia en la presentación de escritos y documentos ante la Administración de Justicia usarán el sistema de comunicaciones

LexNET.

Para la presentación de escritos y documentos por el Ministerio Fiscal, su obligación de uso se deriva del art. 230.1 LOPJ, art. 8, 21 y disposición adicional novena Ley 18/2011 y art. 5 Real Decreto 1065/2015 (12) .

La obligación legal de usar los medios electrónicos se ha extendido también a determinadas categorías de ciudadanos a partir de 1 de enero de 2017, con arreglo a la disposición final duodécima, apartado 2.º, de la Ley 42/2015, de 5 de octubre (13) . En el mismo sentido se ha recogido en el Real Decreto 1065/2015, disposición final cuarta.

El proceso como fruto de la actividad de todos los agentes intervinientes en el mismo se aprecia con mucha mayor claridad en un entorno digital

Los afectados por dicha regulación son los enumerados en el art. 273.3 LEC, y art 4 del Real Decreto 1065/2015 (14) . De ellos, las personas jurídicas y los entes sin personalidad jurídica son los de más usual intervención en el proceso.

Estos colectivos no realizan la presentación electrónica de escritos a través de LexNET, sino por medio de la sede judicial electrónica (15) , de acuerdo al art. 36.1 Ley 18/2011 y 9.2 Real Decreto 1065/2015. Ello es en el supuesto de que no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador, y la entidad pretenda actuar de modo personal y directo ante la Administración de Justicia. Aunque no lo dice expresamente la

ley, en el art. 9.2 Real Decreto 1065/2015 LexNET se hace extensivo dicha norma al orden jurisdiccional social respecto a la actuación de los Graduados sociales.

Por ello, en el caso de que exista un profesional de la justicia asistiendo a uno de los relacionados en el art. 273.3 LEC, la iniciación del procedimiento habrá de realizarse por dicho profesional y utilizando el sistema LexNET. De este modo, este canal de comunicación se ha establecido en la ley como prioritario, y la sede judicial electrónica como subsidiario.

Los ciudadanos restantes (generalmente personas físicas) no tienen obligación legal de presentar sus escritos por vía electrónica, pero sí existe la posibilidad de que voluntariamente se adscriban a dicha forma de comunicación. El art. 4.1 y 33.1 Ley 18/2011 recoge dicho derecho. En igual sentido, el art. 273.2 LEC.

Las Administraciones Públicas también tiene la obligación legal de comunicarse con la Administración de Justicia por vía electrónica, conforme al art. 37.4 Ley 18/2011. En este caso, lo más relevante es la presentación por la Administración de expedientes administrativos cuando ello es preceptivo, sobre todo, en el ámbito contencioso-administrativo y social. Dichos envíos se realizan a través de una plataforma informática perteneciente al Ministerio de Administraciones Públicas denominada «INSIDE».

La Ley 18/2011 alude a una ley derogada (Ley 11/2007, de 22 de junio). En la actualidad, la formación del expediente administrativo electrónico está prevista en los arts. 70 y ss. Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ello sin perjuicio de la obligación legal de los Abogados del Estado, Letrados de las Comunidades Autónomas, Entes Locales y Seguridad Social, entre otros, de utilizar el sistema de comunicación LexNET en base a su consideración de profesionales de la justicia (art. 2 b Real Decreto 1065/2015).

Un supuesto excepcional de presentación electrónica es cuando se produzca un exceso de cabida del envío a que se refiere el art. 135.3 LEC. Es un supuesto usual en asuntos de gran volumen, dado que la cabida de las comunicaciones por LexNET, aunque ha ido aumentando, en la actualidad solo permite envíos de 15 MB. En estos casos, el art. 18 Real Decreto 1065/2015 establece que solo se enviará por LexNET el escrito principal (por ejemplo, la demanda o contestación) y el resto de la documentación que le acompaña junto con el justificante del envío donde consta el exceso de cabida se aportará en soporte digital u otro medio electrónico, con la finalidad de que por la oficina judicial se incorpore al proceso mediante su volcado.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas y Locales y Centros hospitalarios también podrán usar medios electrónicos cuando estén habilitados para ello. Estamos

ante un proceso continuo de expansión, al ir incorporándose estas entidades progresivamente.

3. Presentación de escritos y documentos en formato papel

La presentación de escritos en soporte papel ha quedado notablemente reducida, e incluso se prevé expresamente en el art. 33.1 Ley 18/2011 que se podrá ir ampliando la obligación de relacionarse de forma electrónica con la Administración de Justicia, tanto por vía legal como reglamentaria.

La presentación de los escritos en soporte papel precisará su conversión a formato electrónico, de acuerdo al art. 36.2 Ley 18/2011 y 135.4 LEC si ello es posible, y dicho original se custodiará en el archivo de la oficina judicial.

Como vimos en epígrafe anterior, los ciudadanos no afectados por la obligación de usar la vía electrónica tienen la posibilidad de optar por su uso. Si no lo hacen, pueden presentar los escritos y documentos en papel, y el servicio correspondiente procederá a su escaneo e incorporación al proceso.

Otros supuestos de presentación en papel son los siguientes:

- Si expresamente indica la ley que un determinado escrito o documento debe presentarse en papel, tal como señalan los arts. 135.1 y 273.6 LEC.

- Por las singulares características del documento que impiden su aportación electrónica (art. 38.2 d Ley 18/2011). Un ejemplo de ello serán los documentos no susceptibles de conversión en formato electrónico (art. 135.4 LEC).

- Interrupción del servicio electrónico, esté o no planificada, de acuerdo al art. 135.2 LEC y 12 Real Decreto 1065/2015.

- Documentos respecto de los que se sospecha que son falsos (art. 38.2 e Ley 18/2011). En dicho caso, la ley presume que será preciso el original para practicar la prueba técnica necesaria para verificar si es o no auténtico.

- Un supuesto de doble envío, tanto electrónico como en papel, es el establecido en el art. 162.3 LEC. Es el caso de que la autenticidad de resoluciones, dictámenes o informes solo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos. Pese a ello, se presentarán también por medios electrónicos. Y es necesario que soliciten su presentación en papel los legitimados en dicho artículo, que son:

- a)** Cualquiera de las partes de ese procedimiento

- b)** El Ministerio fiscal

- c)** El Juez o Tribunal competente, únicamente en los procesos de familia, incapacidad o filiación. Ello supone, que los Jueces competentes carecen de la posibilidad de solicitar o exigir, en el resto de procesos, que los documentos o escritos se presenten en papel en base a este precepto.

- Un supuesto excepcional es el derivado de la aportación documental que se hace en el acto de las vistas. En este momento, la inmediatez impide su aportación por medios electrónicos. El art. 426.5 y 429.1 LEC se refieren a estos momentos procesales. El art. 426.5 LEC establece la aportación documental en la audiencia previa, que se llevará a efecto conforme a los arts. 267 y 268 LEC. Si el proceso precisa de abogado o procurador (como en este caso), la aportación debería ser electrónica mediante imagen digitalizada del documento, por obligación de uso de los medios electrónicos

No obstante, no es posible la remisión del documento por LexNET, pues el documento ha de aportarse en el mismo acto de la vista. En la práctica, los documentos se presentan en papel, debiéndose incorporar al proceso con posterioridad mediante su escaneo o volcado, si se facilita su aportación en soporte digital.

- Juegos de copias a efectos de citaciones y emplazamientos (16) . Aunque se presente el proceso por vía electrónica, persiste la obligación legal de aportar juegos de copias de escritos y documentos en papel, a efectos de realizar al demandado el primer emplazamiento, citación o requerimiento. No obstante, si es alguno de los que con arreglo a la ley se le realiza dicha comunicación por vía electrónica, no será necesaria dicha aportación (Administración, persona

jurídica, parte ya personada con profesional, etc).

— Las letras de cambio, pagarés y cheques que dan inicio al juicio cambiario. Debemos considerar tales casos dentro de los supuestos en que es necesario su presentación en original y papel. El art. 821.1 LEC indica que se aportará el título cambiario, y el apartado segundo de dicho artículo que el Tribunal analizará la corrección formal del título. Dado que se trata de documentos nacidos para la circulación y que su posesión permite el ejercicio de los derechos del acreedor cambiario, podemos considerar tales títulos como de necesaria aportación en papel. No obstante, debería incluirse tal circunstancia expresamente en el tenor literal de la ley en futuras reformas legales para evitar equívocos.

En cuanto a la necesidad de la aportación de las escrituras públicas y pólizas mercantiles autorizadas por fedatario público para iniciar el proceso de ejecución de título no judicial e hipotecario (art. 517.2.4.º y 5.º, art. 685 LEC) considero que no sería necesario su aportación en papel.

Su aportación se ha de realizar por profesional de la justicia conforme al art. 267, es decir, de forma electrónica. Tal como indican los 135.1 y 273.1 LEC, art. 36.3 y 38.2 a Ley 18/2011.

Debemos tener en cuenta que si la aportación del título lo hace un profesional de la justicia, o un ciudadano, no tendrá acceso a las copias autorizadas electrónicas notariales de conformidad con el art.224.4 del Reglamento Notarial, que solo permite su expedición a favor de otro notario, un registrador, órgano judicial o Administración Pública.

No obstante, la copia autorizada de la escritura en papel digitalizada y con la firma electrónica del presentante, que reúna los requisitos formales legalmente establecidos (por ejemplo, que sea primera copia), debe considerarse suficiente para el despacho de ejecución, pues no hay ninguna excepción legal en este supuesto.

4. Forma de presentación

La Ley 18/2011 parte de un principio de confianza en que la aportación documental que se hace en el proceso es auténtica mientras no se impugne de contrario. El art. 27.1 de la Ley 18/2011 considera como documentos judiciales electrónicos las resoluciones y actuaciones procesales firmadas electrónicamente y toda información que tenga acceso al proceso si también está firmada electrónicamente.

Si se trata de personas, profesionales o entidades que tienen obligación de usar los medios electrónicos deberán aportar los documentos públicos y privados por dichos medios.

Los art. 38.2 b Ley 18/2011, 267 y 268 LEC permiten que tanto los documentos públicos como privados se aporten mediante una imagen digitalizada de los mismos, con firma electrónica reconocida. En estos casos, la firma electrónica procede del presentante, que normalmente será el profesional remitente: abogado o procurador.

La Ley 18/2011 parte de un principio de confianza en que la aportación documental que se hace en el proceso es auténtica mientras no se impugne de contrario

La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 12 de diciembre de 2017 (17) (AAP MA 386/2017) llega a esta misma conclusión ante la inadmisión de un procedimiento monitorio en el que los documentos acompañados a la pretensión inicial lo fueron por LexNET y el Juzgado consideró que lo presentado eran fotocopias, cuando en realidad eran imágenes digitalizadas de los documentos.

La ley otorga plena validez a dicha presentación. Solo la impugnación de la autenticidad del documento provocará que se proceda a su adveración (art. 38.2.c Ley 18/2011, arts. 302 y 326 LEC y art. 3.8 Ley 59/2003 de firma electrónica).

El Real Decreto 1065/2015 realiza la siguiente distinción, en cuanto a la forma, respecto de los documentos que han de

aportarse:

a) Los escritos principales de los envíos, ya sean iniciadores y alegatorios (demanda, contestación, reconvención) o de mero trámite, han de presentarse en formato PDF/A, con la

característica OCR (18) .

b) Los documentos que se presenten acompañando dichos escritos deberán utilizar los formatos autorizados por la Guía de Interoperabilidad. En concreto se reconocen los siguientes formatos: .pdf, .rtf, .jpeg, .tiff, .odt, .zip. Los documentos de audio, video, o zip comprimido no podrán contener archivos en formatos distintos de los anteriores.

No obstante, debe precisarse que la restricción de formatos que establece este Real Decreto es para su envío por LexNET, lo que en absoluto restringe el derecho de todo ciudadano a utilizar los medios de prueba que considere necesarios, pertinentes y útiles (art. 24.2 CE y 283 LEC). Lo que ocurre es que no podrá enviarlos por este medio electrónico, pero sí aportarlo en otro soporte digital para su inclusión en el proceso.

El Apartado 6 del Anexo IV del Real Decreto que analizamos establece: «Los documentos que sólo contengan texto deberán ser presentados, principalmente, con las características descritas en el número anterior». Dicha referencia es al formato PDF/A, con OCR. Diremos en este momento, que la norma pretende también extender el uso de este formato respecto de los documentos que acompañan al escrito inicial. No obstante, cuando tratemos la cuestión de la inadmisión de los escritos por defectos técnicos nos extenderemos sobre el alcance de dicha norma.

c) Los documentos que acompañan al escrito alegatorio o de trámite han de ir en archivos independientes. Es decir, un archivo electrónico por cada documento o documentos de la misma naturaleza (19) .

d) Estos documentos deben contener una breve descripción (por ejemplo, poder, factura, albarán, tasa, etc.), numeración y catalogación (20) . Con ello, se pretende que en el proceso electrónico pueda identificarse fácilmente el contenido del documento, sin necesidad de tener que ir entrando uno a uno en cada uno de ellos, lo que haría su lectura enormemente engorrosa, y dificultaría el ejercicio de los derechos por las partes y la resolución del procedimiento.

e) En caso de presentación de documentos en archivo comprimido .zip, los documentos contenidos en el mismo deben reunir las mismas características que hemos señalado antes, pues la finalidad es la misma que la de los escritos y documentos no comprimidos, es decir, que mediante la simple lectura de su denominación pueda conocerse su contenido.

f) El art. 273.4 LEC y 9.3 Real Decreto 1065/2015 establecen que el envío documental por LexNET contendrá un índice electrónico. Dicho índice se genera automáticamente con el envío, tanto si se utiliza LexNET como la sede judicial electrónica, y se incorpora al expediente electrónico como un acontecimiento más.

5. Recepción en oficinas de registro y reparto

Los envíos electrónicos se remiten a las oficinas de registro y reparto competentes territorialmente, que tendrán la categoría de subselección electrónica conforme al art. 10 Ley 18/2011, y ello tanto si se remiten por vía LexNET, sede judicial u otro canal electrónico autorizado.

En dicha oficina debe procederse en aplicación de las normas establecidas de registro y reparto a su remisión a la oficina judicial destinataria.

En la actualidad, la importancia de los sistemas informáticos en la realización de estas funciones es tan determinante que a veces es difícil conjugar estos sistemas con normas de reparto de asuntos elaboradas por Juntas de Jueces, que no tengan en cuenta los límites informáticos que presentan las herramientas técnicas, y que además deben seguir el Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad.

Un problema de difícil solución se produce cuando el envío electrónico inicial es erróneo: se manda el envío al buzón de otra jurisdicción, o la demanda de ejecución al buzón de declarativos, etc. Dichos problemas plantean problemas técnicos y legales, en torno a si puede ser posible la integración en el buzón electrónico adecuado, o en caso no ser posible técnicamente, si es factible la devolución al profesional que lo presentó erróneamente para su reenvío al lugar adecuado, y sobre todo, en qué medida ello afecta al derecho a la tutela judicial efectiva.

Los arts. 12 y 17 Real Decreto 1065/2015, y el art. 135.2 LEC contemplan la imposibilidad de realizar el envío electrónico, distinguiendo entre:

- Interrupción no planificada del servicio. En este caso, prevé la ley que se pueda efectuar la presentación el primer día hábil siguiente acreditándolo mediante el justificante de dicha interrupción.
- Interrupción planificada del servicio, en cuyo caso lo previsto por dichas normas es que se habilitarán vías alternativas de presentación de escritos.
- Anomalías en la transmisión electrónica o imposibilidad de completar el envío (art. 17.5 Real Decreto 1065/2015). En este caso, el sistema emite un mensaje de error para que el presentante proceda a la subsanación y realice el envío en otro momento o por otros medios.

Como vemos, los supuestos contemplados son diversos, y por ello tienen un tratamiento jurídico diferente.

En el caso de la interrupción no planificada del servicio, alude a un problema general en el sistema, lo que debe ser conocido por el propio Ministerio de Justicia, y acreditado por los usuarios del sistema sin problema. En estos casos, el sistema no emite un mensaje de error, pues es un caso general. Los que pretendan presentar los escritos gozan de un día hábil más una vez cesada la interrupción.

Supuesto diferente es el contemplado en el art. 17.5 Real Decreto 1065/2015, que alude a: «anomalías en la transmisión electrónica o no haya sido posible completar el envío». En este caso, el sistema emite un mensaje de error, que es lo que faculta al presentante a subsanar. La manera de subsanar es volver a realizar el envío electrónico tan pronto como le llegue el mensaje de error, o si no puede, proceder a una presentación en papel. En este supuesto, no estamos ante un caso generalizado, sino a un caso concreto, por ello el sistema ofrece al presentante ese mensaje de error que constituye la salvaguarda del ejercicio de su derecho. Dicha subsanación deberá ser entendida como si el escrito se presentó en la fecha y hora del envío inicial, tal como establece el art.17.5 Real Decreto 1065/2015, último párrafo.

La interrupción planificada del servicio debe ser anunciada con veinte días de antelación, y en su anuncio podrá informar de los medios alternativos de presentación que se ofrezcan.

La jurisprudencia de la Sala de lo Social del TS se ha ocupado en algunos casos de problemas de rechazo en la presentación de escritos por LexNET. Dichos problemas de rechazo pueden no venir motivados por problemas técnicos, que son los contemplados en los arts. 12, 17 Real Decreto LexNET, y 135.2 LEC, sino por problemas humanos.

Por ejemplo, los autos TS, Sala de lo Social n.º 9595/2017, de 4 de octubre y 6996/2017 de 28 de junio, plantean la cuestión de rechazo en la presentación por LexNET por error en el presentante en la identificación del procedimiento concreto al que iba destinado su escrito. En puridad, no entra en los supuestos establecidos en las normas anteriores, que obedecen a causas técnicas, y no a defectos humanos. No obstante, el TS en ambos casos se inclina por la posibilidad de subsanación y la admisión del mismo.

Los autos TS, Sala de lo Social, 2918/2017, de 16 de marzo y 12777/2017, de 21 de diciembre tratan también supuestos de rechazo, pero no consta cuál fuera la causa de dicho rechazo. En ambos casos también opta el Alto Tribunal por admitir la subsanación del error. En el primer auto, por aplicación del art. 135.2 LEC, lo considera como si fuera una interrupción no planificada del servicio, pero al no haberse subsanado en dicho plazo por el presentante, desestima el recurso. En el segundo auto, al presentarse un mensaje de error por el usuario, estima aplicable el art. 17.5 Real Decreto 1065/2015, y considera que la subsanación realizada lo fue correctamente, por lo que como fecha de presentación cuenta la del primer envío erróneo, y por ello admite el escrito de interposición del recurso.

Como vemos, el criterio del TS es la posibilidad de subsanar los rechazos en los envíos electrónicos, con independencia de la causa, humana o técnica que la motive, en aras a preservar los derechos de los ciudadanos en el proceso.

No obstante, esta cuestión demanda una más detallada regulación legal que clarifique los distintos supuestos que puedan motivar la imposibilidad de acceso al sistema de envíos

electrónicos, en aras a preservar tanto los derechos de los ciudadanos como la ordenación de los trámites procesales en las oficinas judiciales.

IV. Subsanación por defectos técnicos

1. Regulación legal

La existencia del proceso judicial electrónico con las consideraciones realizadas anteriormente para su correcta confección, plantea la necesidad de que junto al análisis de los requisitos procesales de admisibilidad de los escritos de partes e intervinientes, se realice otro pormenorizado de defectos técnicos informáticos.

La Ley 18/2011, ya recogió este criterio en el art. 43, siendo posteriormente reformado y completado con el art. 273.5 LEC (21), que sin embargo, contiene una regulación legal no enteramente conforme con el primer precepto. Este artículo procede de la Ley 42/2015, cuyo propósito fue dar nacimiento al expediente judicial electrónico. Dicha reforma simplemente unifica el plazo máximo de cinco días para pedir la subsanación, lo que es desde luego criticable, pues pierde la ocasión de contribuir a la seguridad jurídica mediante la unificación de los trámites procesales.

Esta ley modificó al apartado 1 del art. 43 Ley 18/2011, pero no el apartado 3, que es el que más intensamente entra en colisión con la regulación legal contenida en la LEC, pues permite que el requerimiento de subsanación por defectos informáticos se haga una sola vez a cada profesional por partido judicial, tras lo cual sus escritos serán inadmitidos de plano.

Esta tajante precisión de la ley resulta difícilmente aplicable por:

- a)** Requiere una notable coordinación de todos los órganos judiciales de un mismo partido judicial a efectos de detectar el primer incumplimiento de cada profesional, para tenerlo en cuenta en el futuro.
- b)** Es contrario a una ley posterior, la establecida en la LEC, que no sanciona de forma tan grave el incumplimiento del uso de las TIC, sino que la subsanación debe realizarse en cada asunto de forma individualizada.
- c)** Es difícilmente compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE.

Por ello, habrá de entenderse que en este punto prima la regulación legal de la LEC, frente a la de la Ley 18/2011.

2. Supuestos de subsanación

La subsanación de defectos debe realizarse, según la LEC, con independencia de quién sea el sujeto que realiza el envío telemático, a diferencia de la Ley 18/2011, que se refiere a un profesional de la justicia, y su contenido es en la LEC: «el incumplimiento del deber de uso de las tecnologías previsto en este artículo y de las especificaciones técnicas que se establezcan», lo cual provoca la espinosa y controvertida cuestión de cuáles serán los incumplimientos determinantes de la apreciación de un defecto técnico que la motive (22).

Para clarificar esta cuestión debemos precisar que no podemos olvidar los principios sobre los que se sustenta el proceso judicial electrónico. Si éste ha de ser un proceso ordenado cronológicamente, con acontecimientos que describan el contenido documental que incorporan, debidamente completo y de visionado y lectura accesible, tenemos unos datos iniciales que nos sirvan para determinar los incumplimientos que provocan una necesidad de subsanación.

Vamos a tratar de exponer una serie de supuestos concretos:

- a)** Es esencial que todo escrito principal, tanto iniciador como de trámite, se presente en formato PDF/A, con característica OCR (apartado 5.º, Anexo IV, Real Decreto 1065/2015).
- b)** No se puede presentar conjuntamente la demanda con los documentos en un solo archivo.
- c)** Los documentos adjuntos al escrito principal deben presentarse en formato autorizado: .pdf, .rtf, .jpeg, .tiff, .odt, .zip.

Si alguno de ellos solo contuviera texto, han de presentarse principalmente en formato PDF/A, con característica OCR (apartado 6.º, Anexo IV, Real Decreto 1065/2015).

4) Estos documentos adjuntos se deben enviar numerados y ordenados cronológicamente, y tienen que contener una breve descripción, que permita conocer su contenido, como por ejemplo: poder, factura, contrato, etc (apartado 6.º, Anexo IV, Real Decreto 1065/2015). También deben contener su catalogación conforme a la Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Administración de Justicia.

5) Las demandas, escritos y documentos en papel que se adjunten en archivos electrónicos deben presentarse con firma electrónica reconocida. El art. 36.3, 38.2 a Ley 18/2011, y 273.5 LEC exige que lleven esta firma. El apartado 5.º Anexo IV Real Decreto 1065/2015 se refiere al escrito principal, y concreta que deben contar con la firma del profesional o profesionales actuantes.

Ello nos puede llevar a una serie de conclusiones sobre la firma electrónica de los escritos y documentos:

a) Debe tratarse de una firma electrónica reconocida o cualificada.

b) Se exige por los arts. 267, 268, 273 LEC y 38.2 a Ley 18/2011 que los documentos públicos y privados que se aporten de forma electrónica lleven también firma electrónica (23) . Si actúan en ese proceso dos profesionales (por ejemplo, abogado y procurador), bastará que los documentos adjuntos estén firmados electrónicamente por uno solo.

c) En cambio, si se trata de la demanda y solo la firma uno electrónicamente y el proceso precisa de postulación de abogado y procurador, el escrito deberá llevar la firma manuscrita del otro profesional interviniente. No obstante, la presentación electrónica que supone el envío, lleva una firma electrónica (art. 273.4 LEC) (24) , por lo que firmar electrónicamente el envío puede ser considerado como firma del escrito principal (demanda, contestación, etc).

d) Si el documento electrónico está firmado electrónicamente por quién lo emitió: notario, funcionario público, no precisará que lo firme también el profesional presentante (art. 38.2 b Ley 18/2011).

e) Un supuesto de incumplimiento frontal es la presentación en papel del escrito y documento en vez de en forma electrónica, o la falta de presentación en papel de las copias y documentos que motiven una primera comunicación al demandado, cuando ello es necesario.

Podrá entenderse que el incumplimiento de estos requisitos técnicos acarrea la necesidad de petición de subsanación, con el apercibimiento contemplado en la ley. En estos casos, se dictará diligencia de ordenación solicitando la subsanación por plazo máximo de cinco días.

El nuevo escrito presentado debe ser analizado de nuevo técnicamente, para determinar si el defecto se ha subsanado.

3. Efectos de la falta de subsanación

El art. 273.5 LEC considera que si no se subsana en plazo el defecto observado, el escrito y documento se tendrá por no presentado. El art. 43.2 Ley 18/2011 manifiesta que no se admitirá la actuación que se trate de realizar.

Si se trata de un escrito iniciador (demanda), la falta de subsanación determinará la inadmisión de la misma. De este modo, con arreglo al art. 404.2, apartado 2.º LEC el Letrado de la Administración de Justicia da cuenta al Juez competente para que resuelva sobre la inadmisión de la demanda.

Si se dicta auto de inadmisión cabe interponer contra el mismo recurso de apelación. Ya son usuales las resoluciones de inadmisión por estos motivos técnicos, una vez implantado el expediente judicial electrónico. No obstante, no se ha formado aún un cuerpo de jurisprudencia que pueda servir de referencia, salvo en contados casos. En ocasiones, los autos de inadmisión simplemente aluden a que no se han cumplido los requisitos técnicos tras el requerimiento efectuado por el Letrado de la Administración de Justicia, lo que no permite extraer de ellos una doctrina jurisprudencial.

Es muy ilustrativo el auto del Juzgado de 1.ª instancia 10

El art. 273.5 LEC considera que si no se subsana en plazo el defecto observado, el escrito y documento se tendrá por no presentado, y el art. 43.2 Ley 18/2011 manifiesta que no se admitirá la actuación que se trate de realizar

de Murcia de 17 de julio de 2017 (CNA 572/2017), que inadmitió un concurso de persona física, pues recoge pantallazos de la aplicación informática para demostrar que el presentante no cumplió el deber de describir los documentos que presenta, afirmando textualmente que: «no sólo se trata del cumplimiento formal de una norma procesal sino que también tiene trascendencia material pues el correcto nombramiento y descripción de los archivos que se aportan permite la directa localización de los correspondientes documentos en el seno del recién estrenado expediente judicial digital a fin de llevar a cabo de una forma eficiente los correspondientes juicios jurídicos de valor, tanto para resolver sobre su admisión a trámite "ex" art. ley (art. 6.2 de la Ley concursal) como para la resolución de ulteriores incidentes concursales».

Si la falta de subsanación en el escrito presentado se produce con posterioridad, con la contestación por ejemplo, se producirá la preclusión y se declarará en rebeldía al demandado. Si es un escrito de trámite, se inadmitirá.

En cualquier caso, la formación de los profesionales de la justicia en estas nuevas herramientas y la comprensión de las consecuencias jurídicas que conlleva, es esencial para el desarrollo de la toda la actividad procesal, y específicamente, de la función jurisdiccional.

V. Comunicaciones electrónicas

1. Vías electrónicas de comunicación y destinatarios

La obligación de uso de las TIC en el proceso tiene un carácter bidireccional, no solo para la presentación de escritos ante la Administración de Justicia por profesionales, Administraciones y ciudadanos, tal como vimos anteriormente, sino también por parte de los integrantes de los órganos judiciales y fiscales. Esto atañe a todos sus componentes: jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses, gestores, tramitadores y funcionarios de auxilio.

También comprende la obligación genérica de uso de las TIC en toda la actividad procesal: firma electrónica de resoluciones, grabación y firma de vistas, consultas informáticas, dación de cuenta informática, etc.

Respecto de las comunicaciones del órgano judicial con partes y terceros interesados, debe adoptarse la forma electrónica con preferencia a las demás, y habrá de entenderse que existe, por tanto, una preeminencia en el uso de esta vía (25) .

La Exposición de Motivos de la Ley 42/2015, afirmaba: «con la finalidad de que la comunicación electrónica sea la forma habitual de actuar en la Administración de Justicia también en relación con los ciudadanos, se establece expresamente que los actos de comunicación se podrán realizar en la dirección electrónica habilitada por el destinatario o por medio de otro sistema telemático, aunque ello será posible a partir del 1 de enero de 2017».

Por tanto, de las mismas entidades, colectivos y ciudadanos de los que manifestábamos que tienen obligación de presentar escritos por vía electrónica en el apartado 3.2, existe por los órganos judiciales la obligación de realizarle las comunicaciones electrónicas.

Las vías electrónicas de comunicación son las siguientes:

- El sistema de comunicaciones LexNET, cuyos destinatarios son: profesionales de la justicia del art. 2 b Real Decreto 1065/2015, Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas, Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, Policías autonómicas y Locales, Centros hospitalarios, médicos forenses e integrantes de los equipos técnicos al servicio de la Administración de Justicia.
- La sede judicial electrónica y servicio compartido de Gestión de notificaciones electrónicas del Ministerio de Hacienda, a que se refiere el art. 11.1 b y c Real Decreto 1065/2015, para las

notificaciones a los destinatarios no incluidos en el sistema LexNET (26) : personas jurídicas, entidades sin personalidad, ciudadanos que han optado voluntariamente por la notificación electrónica (art. 8 Real Decreto 1065/2015).

— No existen en la actualidad otros canales electrónicos de notificación, sin perjuicio de que puedan desarrollarse, de conformidad con el art. 11.1.d), 21, 22, 23, 24, 25 Real Decreto 1065/2015.

2. Prioridad de las comunicaciones electrónicas

Tanto la Ley 18/2011 y el Real Decreto 1065/2015, como la LEC (27) , han optado por dar preferencia a las comunicaciones electrónicas, por lo que habrá de entenderse que si el destinatario está obligado al uso de las TIC, la comunicación judicial se practicará por medios electrónicos, y ello desde la primera comunicación que se libra en el proceso.

Recordemos lo ya recogido a propósito de la Exposición de Motivos de la Ley 42/2015, de reforma de la LEC, lo que pretende incrementar el uso de los medios tecnológicos.

No obstante, debemos tener en cuenta que dicha reforma procesal es parcial y no comprende la totalidad de sus preceptos, y éstos siguen conteniendo numerosas prescripciones de notificaciones en «papel», que a mi juicio habrá que reservar a los supuestos legales en que el destinatario no tiene obligación de usar las comunicaciones electrónicas.

La primera comunicación que se hace al demandado tiene una enorme relevancia procesal, pues es la que determina el primer conocimiento que éste tiene del proceso, y es la que le permite esgrimir las defensas oportunas frente a la pretensión formulada. Este primer emplazamiento, citación o requerimiento ha de practicarse también de forma electrónica si ello es posible. Demos distinguir:

— Si el demandado es una persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica o una persona física que ha optado por la comunicación electrónica, esta primera comunicación procesal se le hará a través de la sede judicial electrónica, utilizando el servicio compartido de notificaciones del Ministerio Hacienda.

— Si el demandado es el Ministerio Fiscal, la Administración del Estado o la Comunidad Autónoma, Seguridad Social, etc., o actúa por un profesional de la justicia, la comunicación se efectúa por vía electrónica utilizando el sistema LexNET (28) .

— Si el demandado es una persona física que no ha optado por la vía electrónica, se le hará esta comunicación en papel.

Si el demandado se persona con procurador, debe tenerse en cuenta que dicho profesional ostenta legalmente la representación en el proceso (art. 23,152.3.1.ª, 153 LEC), por lo que desde que conste que está representado con procurador las comunicaciones procesales se harán con el mismo y por vía electrónica, no pudiendo efectuarse simultáneamente de ninguna otra forma.

Por ello, podemos hablar de una preeminencia de esta forma de comunicación electrónica frente a las demás, y dentro de ella, si la representación procesal está conferida al procurador se produce la exclusión de la notificación electrónica de cualquier otra forma, aunque sea tecnológicamente viable.

La comunicación electrónica, como cualquier otra, debe ser completa. Debe de notificarse la resolución procesal con los escritos y documentos que son objeto de traslado con dicha comunicación. Por ejemplo, si se trata de la primera comunicación procesal al demandado, dicha notificación electrónica ha de contar con:

- Copia de la resolución que se notifica: decreto, diligencia, auto.
- La cédula que se expida
- La demanda y la totalidad de los documentos acompañados a la misma.

Si la notificación adolece de defectos por no ir acompañados la totalidad de los documentos precisos, el litigante afectado debe comunicarlo a la oficina judicial a efectos de paralizar el plazo legal, y promover una notificación completa. Dichas deficiencias pueden provocar la nulidad de la notificación al impedir que el demandado conozca la totalidad de los documentos presentados por

el litigante contrario, lo que pueda perturbar su derecho de defensa.

3. Especialidad de la comunicación por sede electrónica

Como vimos en epígrafes anteriores, desde el 1 de enero de 2017 se realizarán comunicaciones electrónicas con las personas y entidades a que se refiere el art. 273.3 LEC.

Para ello, la ley ha establecido la obligación de las mismas de presentar y recibir comunicaciones electrónicas. Esta es una obligación legal. Para ello, la notificación electrónica que se practica a personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica se realiza utilizando la sede judicial electrónica, y la documentación se deposita en el buzón de notificaciones electrónicas dependientes del Ministerio de Hacienda. Ello lo regula el art. 11.1 b, c Real Decreto 1065/2015.

Es decir, se depositan en el mismo buzón en el que reciben las notificaciones administrativas o tributarias.

Ello ha ocasionado equívocos que es preciso aclarar, por lo que debemos partir de las siguientes premisas:

- Las personas jurídicas y entidades sin personalidad tienen la obligación de relacionarse con la Administración de Justicia por vías electrónicas y de recibir las comunicaciones por este medio. Como hemos visto, es un medio preferente, que en caso de estar disponible, excluye a los demás.

- Esta obligación legal de acuerdo con la disposición final duodécima, apartado 1.º y 2.º de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, es exclusivamente para los asuntos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017 (29) . Lo que excluye su aplicación a todos los asuntos que hayan sido incoados con anterioridad a dicha fecha.

- Estas notificaciones electrónicas se remiten por el órgano judicial a través de la sede judicial electrónica, y son depositadas en el buzón que cada entidad tiene dependiente del Ministerio de Hacienda.

- Las regulaciones legales de las notificaciones administrativas en el buzón de la entidad proporcionado por el Ministerio de Hacienda, tienen un plazo de vigencia de 10 días, transcurrido el cual sin ser aperturadas se presume su rechazo. No obstante, dicha legislación es exclusivamente administrativa. Y debemos recordar que la notificación realizada por un órgano judicial en dicho buzón, si ha sido recibida, es completamente válida y eficaz, no está sometida a ningún plazo para su validez, y aún menos puede dejarse a la voluntad del destinatario aceptarla o rechazarla. Ninguna notificación judicial, ya sea electrónica o en papel, válidamente realizada puede ser rechazada. La legislación procesal nunca establece dicha posibilidad, por lo que no debe nunca confundirse una notificación judicial realizada por los canales electrónicos habilitados por el Ministerio de Hacienda, que será una comunicación procesal sometida a su propia legislación, con una notificación administrativa que utilice ese mismo canal de comunicación electrónica (30) .

- El art. 11.2 Real Decreto 1065/2015 establece textualmente: «Será de aplicación a los actos de comunicación realizados a través de la sede judicial electrónica lo dispuesto en el art. 162.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil». Como puede observarse en dicho precepto, el destinatario tiene el plazo de tres días para aperturar el buzón y darse por notificado. Si no lo hace en dicho plazo, la notificación produce todos sus efectos. Es decir, se le aplica el mismo régimen jurídico que a las notificaciones efectuadas a abogados y graduados sociales. Por tanto, no puede ser rechazada ni expresa ni tácitamente, mediante el procedimiento de no abrir el buzón.

DE LAMO RUBIO (31) , plantea la problemática de la notificación por sede electrónica en caso de empresas desaparecidas, en el ámbito social, lo que puede tener efectos perturbadores si más tarde se acredita esa situación, sobre todo para el trabajador.

No obstante, estima aplicable a la notificación actual por sede electrónica el art. 22 Real Decreto 1065/2015 Lexnet, que en su último párrafo establece lo siguiente: «La dirección electrónica habilitada tendrá vigencia indefinida, excepto en los supuestos que sea solicitada su revocación por su titular, por fallecimiento de la persona física, extinción de la personalidad jurídica o disolución de la entidad sin personalidad, por resolución judicial que así lo ordene, o por el transcurso de cinco

años sin ser utilizada para realizar acto de comunicación alguno».

A mi juicio, tal artículo no es aplicable a las notificaciones electrónicas que en la actualidad se están efectuando a las personas jurídicas y entidades sin personalidad, por los siguientes motivos:

a) La notificación electrónica actual se efectúa utilizando la sede electrónica judicial, pero como un medio tecnológico que enlaza con la dirección electrónica del Ministerio de Hacienda. La notificación se deposita en dicho buzón perteneciente y dependiente del Ministerio de Hacienda, y no del Ministerio de Justicia, ni de la sede judicial electrónica. Ello supone que las personas jurídicas no pueden cerrar dicho canal de comunicación en base al art. 22.2 del Real Decreto 1065/2015, sino que éste permanecerá abierto hasta que de acuerdo con las normas tributarias el Ministerio de Hacienda acuerde su cierre.

b) El art. 22.2 Real Decreto 1065/2015, se está refiriendo a una dirección electrónica habilitada dentro de la sede judicial electrónica perteneciente al Ministerio de Justicia, en la que el ciudadano (lo que incluye a las personas físicas) podrá solicitar la apertura de esta dirección electrónica. Por tanto, es una actividad voluntaria su apertura por el ciudadano, y como consecuencia de esa voluntariedad se colige que pueda ser revocada. Esta voluntariedad en su uso no impide que según la ley, los ciudadanos a que se refiere el art. 273.3 LEC tengan una obligación legal de relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos, y que deban existir cauces tecnológicos obligatorios para dicha relación, que son los fijados en los art. 11.1 b y c Real Decreto 1065/2015, y constituyen la fundamentación jurídica de esta forma de comunicación.

c) El supuesto contemplado en el art. 22 Real Decreto 1065/2015 aún no está operativo tecnológicamente, al igual que no lo está la comunicación por comparecencia electrónica (art. 21), mediante correo electrónico (art. 23) o edictal (art. 24).

4. Régimen legal de las comunicaciones electrónicas

La LEC establece una distinta regulación jurídica de las comunicaciones electrónicas en dos preceptos distintos. El art. 151.2 y el 162.2 LEC.

Concretamente, el art. 151.2 LEC establece como destinatarios de las comunicaciones electrónicas: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, Administraciones de las Comunidades Autónomas o Entes Locales y las efectuadas a los procuradores a través de los Colegios de Procuradores.

Por ello, solamente a estos colectivos se les aplica el régimen jurídico establecido en esta disposición legal.

Ello significa que la notificación electrónica se entiende realizada al día siguiente hábil de que se haya recibido, si la remisión es anterior a las 15,00 horas.

Si la notificación se remite a partir de las 15,00 horas, se entiende realizada al segundo día hábil de su remisión (32) . Debe tenerse en cuenta que la ley parte en este caso de una ficción, y es que aunque la notificación haya llegado el mismo día de su remisión, debemos entender que llegó el día hábil siguiente.

Ello es determinante para fijar el «dies a quo», a efectos de cómputo de plazo, como veremos en el epígrafe sexto de este trabajo.

Debe tenerse en cuenta que conforme al art. 133.1 LEC (33) , el plazo comenzará a correr al día siguiente de que la notificación electrónica se tenga por realizada.

Es de destacar que todas estas notificaciones se practican a destinatarios institucionales, y a los procuradores dicha notificación no se le efectúa directamente a cada uno de ellos, sino a través de un cauce institucional, que es su Colegio de Procuradores (34) , el cual tras recibirla la remite al buzón de LexNET de cada profesional.

En cambio, la regulación legal contemplada en el art. 162.2 LEC excluye a los procuradores, y debe entenderse la exclusión de los demás que expresamente cita el art. 151.2 LEC, pues el régimen jurídico es totalmente diferente.

Partiendo de dicha exclusión, en el art. 162.2 LEC estarán

La regulación legal contemplada en el art. 162.2 LEC excluye a los procuradores, y debe entenderse la exclusión de los demás que expresamente cita el art. 151.2 LEC

comprendidas las notificaciones electrónicas realizadas a abogados, graduados sociales y las que se efectúan por sede judicial electrónica (en aplicación del art. 11.2 Real Decreto 1065/2015).

Como vimos anteriormente, por sede judicial electrónica, a fecha actual, se efectúan las comunicaciones a ciudadanos que hayan optado por este sistema, a personas jurídicas y a entidades sin personalidad jurídica.

El modo de efectuar dicha comunicación electrónica consiste en su envío y depósito en el buzón virtual del destinatario.

En dicho caso, la ley valora la diligencia del destinatario, y le atribuye un plazo de 3 días para que por sí mismo, proceda a la apertura del buzón y acceda al contenido de la

notificación.

Dicho plazo de tres días habrá de entenderse que empieza a contar desde la correcta recepción de la comunicación.

Es decir, en estos supuestos lo determinante es la recepción positiva de dicha notificación electrónica. Nótese que conforme al art. 152.1, párrafo 4.ª (35) LEC, las notificaciones de todo tipo, y entre ellas, las electrónicas requieren que se hayan efectivamente practicado. De igual modo, el art. 133.1 LEC establece que el comienzo del plazo es el día siguiente de que se hayan efectuado. Y el propio art. 162.1 LEC se refiere al: «resguardo acreditativo de la recepción que proceda».

Por ello, una fecha será la remisión de la notificación electrónica, y otra fecha la recepción de la misma en el buzón del destinatario, siendo ésta última la relevante, pues en puridad, puede que se haya remitido y ésta no haya llegado nunca a destino por cualquier problema informático.

Los efectos jurídicos en cuanto al cómputo de plazos serán distintos según el destinatario abra o no el buzón.

Si accede a su contenido, deberá tenerse en cuenta qué día de los tres establecidos tuvo acceso.

Si no tiene acceso dentro de los 3 días establecidos, la notificación se entenderá realizada igualmente (36) .

Lo que no puede nunca mantenerse, tal como vimos anteriormente, es que la notificación pueda ser rechazada, o pueda entenderse que si no la abre se presumirá su rechazo.

No obstante, será igualmente aplicable a este supuesto el art. 133.1 LEC, y el plazo comenzará a correr el día siguiente a su realización.

La existencia de un distinto régimen jurídico de las notificaciones electrónicas en estos dos supuestos lo debemos fundar en lo siguiente:

a) El art. 151.2 LEC es un precepto especial, frente al precepto general sobre los actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares, que están contenidos en el art. 162 LEC.

b) El sistema de cómputo de plazos es diferente en ambos artículos, pues respecto de los colectivos a que se refiere el art. 151.2 LEC la notificación electrónica se entiende realizada al día siguiente a su recepción, con la salvedad de que sea posterior a las 15,00 horas, que será al segundo día hábil. En cambio, si se aplica el art. 162.2 LEC, la notificación se entenderá realizada en función de la actividad del destinatario en el acceso a la comunicación, al que se le concede un plazo de 3 días para concretar dicho acceso.

c) Se ha pretendido en la ley establecer distinto régimen de notificaciones entre los colectivos de carácter público, a los que se les aplica el art. 151.2 LEC. A ellos se añade únicamente a los procuradores, sin duda por el hecho de que la notificación no se hace al profesional, sino a la Institución (su Colegio Profesional). Y por otro lado, las notificaciones que se practican a profesionales privados (abogados, graduados sociales, y ciudadanos), a los que se les permite dilatar la notificación hasta tres días, tiempo de gracia establecido para que

puedan organizar su actividad sin que con ello se resienta su derecho a la tutela judicial efectiva.

A ambos supuestos les será igualmente aplicable el art. 133.1 LEC, pues hay que distinguir entre la fecha en que se produce la notificación, y la fecha del comienzo del plazo, que con dicho artículo será el día hábil siguiente a la fecha de la notificación.

VI. Plazos procesales

1. Presentación de escritos. Momento inicial

Con las comunicaciones electrónicas se producen cambios sustanciales en la regulación jurídica con respecto a las tradicionales notificaciones.

Para un registro electrónico no existe diferenciación de días y horas, por lo que dichos registros para la presentación de escritos están abiertos todas las horas de todos los días del año. Dispone el art. 32.2 Ley 18/2011: «Los registros electrónicos permitirán la presentación de escritos, documentos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas».

No obstante, ello no altera la legislación procesal, sino que determinará cuando debe considerarse que se ha presentado un escrito concreto. Para ello, el art. 32.3 Ley 18/2011, ofrece una sencilla solución, proclamando: «...la presentación, en un día inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente». En el mismo sentido el art. 135.1 LEC.

El art. 12.1 Real Decreto 1065/2015, establece al respecto: «En ningún caso la presentación electrónica de escritos y documentos o la recepción de actos de comunicación por medios electrónicos implicará la alteración de lo establecido en las leyes sobre el tiempo hábil para las actuaciones procesales, plazos y su cómputo, ni tampoco supondrá ningún trato discriminatorio en la tramitación y resolución de los procesos y actuaciones ante los órganos y oficinas judiciales y fiscales».

El art. 130.3 LEC, establece con carácter general que las horas hábiles son las que van desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, salvo que la ley, para una actuación concreta, disponga otra cosa. (37)

Ello tiene la excepción de los actos de comunicación y ejecución, que pueden practicarse hasta las 22,00 horas. No obstante, no viene referido a la presentación de escritos, por lo que de acuerdo a este art. 130.3 LEC, todas las presentaciones de escritos realizadas con posterioridad a las 20,00 horas, se entenderán como presentadas el primer día hábil siguiente a las 8,00 de la mañana (38)

La presentación de escritos se realizará mediante su envío a la sede o subsele judicial electrónica correspondiente, teniendo en cuenta que cada subsele electrónica coincide con la oficina de registro y reparto de cada partido judicial. Contarán con sistemas de registro electrónico, estableciendo el art. 30.3 Ley 18/2011 que: «en estos registros judiciales electrónicos se admitirán escritos y documentos dirigidos a las oficinas judiciales dependientes del mismo».

Es decir, los escritos deben ser presentados y dirigidos al registro electrónico correspondiente del partido judicial competente, para su posterior reparto a la oficina judicial o Juzgado que haya de tramitarlo.

Para determinar la fecha y hora de la presentación de un escrito, la Ley 18/2011 establece en su art. 32.1 que ha de atenderse a la fecha y hora oficial de la sede judicial electrónica de acceso.

Este sellado de tiempo es esencial para el posterior cómputo del plazo procesal. Todas las sedes electrónicas deben acomodarse a la hora oficial del Estado, que marca el Real Instituto y Observatorio de la Armada, según Real Decreto n.º 1.308/1992, de 23 de octubre.

Dado que junto a los días inhábiles de carácter nacional, existen otros de carácter autonómico o local, el art. 32.5 Ley 18/2011 dispone que: «cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, atendiendo el ámbito territorial en que ejerce sus competencias el titular de aquélla, los días que se consideran inhábiles a los efectos de los apartados

anteriores»•

2. Presentación de escritos. Momento final

La presentación de escritos sometidos a plazo tiene un *dies ad quem* en función del término establecido en la ley.

Para el cómputo del plazo debe tenerse en cuenta el art. 135.5 LEC que permite la presentación del escrito hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, y ello tanto a escritos presentados en papel como a escritos electrónicos.

Este es el criterio seguido por el acuerdo no jurisdiccional de 6 de julio de 2016, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y mantenido por la jurisprudencia de dicho Tribunal (39) (ATS 10425/2017 de 25 octubre; 9595/2017 de 4 de octubre, ambos de la Sala de lo Social).

3. Comunicaciones. Momento inicial

Con relación a las comunicaciones electrónicas remitidas desde la oficina judicial a los distintos destinatarios, debemos partir también de que la Ley 18/2011 dispone en su art. 33.2 que se realizarán con sujeción a la legislación procesal, y: «serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifique con la autenticación que sea exigible al remitente y al destinatario de las mismas».

En el mismo sentido, el art. 34.1 Ley 18/2011 establece que el sistema permitirá conocer la fecha y hora de la salida de la notificación, de la puesta a disposición del interesado y de su acceso.

Las comunicaciones procesales deben practicarse en días y horas hábiles, por lo que de conformidad con el art. 130 LEC pueden practicarse hasta las 22,00 horas de los días hábiles.

De todo ello, podemos establecer las siguientes conclusiones:

a) Las comunicaciones procesales, y también las electrónicas, se rigen por el principio de la recepción, no por el principio del conocimiento del destinatario. Por ello, lo relevante procesalmente es si se practicó correctamente de forma electrónica y fue correctamente recibida por el mismo. Si después se enteró o no de dicha comunicación, dependerá en gran medida de su propia diligencia, pero la comunicación procesal desplegará todos sus efectos.

b) Para ser válida la comunicación es necesario que sea completa, es decir, que comprenda la totalidad de los documentos que deben acompañarse a la misma. Si se emplaza a un demandado, dicho acto debe contener los documentos necesarios para su defensa: demanda, documentos acompañados a la misma, cédulas, etc.

c) A diferencia de la presentación de escritos, que puede hacerse cualquier día y a cualquier hora, la comunicación procesal electrónica ha de efectuarse en día y hora hábil, que medie entre las 8 de la mañana y las 22,00 horas de la noche, salvo que la ley disponga otra cosa, o se trate de una actuación urgente.

d) Es necesario que la comunicación se dirija al destinatario y no a otra persona o entidad. Ello no suele acarrear problemas con las notificaciones por LexNET a los profesionales, que están debidamente identificados en el sistema. Si pueden ocurrir equívocos con personas jurídicas con transformaciones sociales, o grupo de empresas que aunque formen un grupo homogéneo, pueden tener distinta denominación e identificación fiscal. En estos casos, será necesaria la comprobación de que la comunicación se dirigió a la entidad adecuada.

4. Cómputo de plazos

En el cómputo de los plazos procesales debemos apreciar un distinto tratamiento jurídico en función de quién sea el destinatario de la comunicación.

Por ello, hay que distinguir las notificaciones realizadas a los colectivos a que hace referencia el art. 151.2 LEC, de aquéllas que van dirigidas a los colectivos a los que se les aplica el art. 162.2 LEC.

Dentro de los primeros debemos hacer una subclasificación, por el especial régimen jurídico que presenta el Ministerio Fiscal.

a) Comunicaciones dirigidas a: Abogacía del Estado, Letrados de las Cortes Generales y

de las Asambleas Legislativas, Letrados de la Seguridad Social, Letrados de las Comunidades Autónomas y Entes Locales, y procuradores

A estas notificaciones electrónicas se les aplica el art. 151.2 LEC, que como vimos anteriormente, consideramos un precepto especial frente al genérico 162 LEC.

Debemos distinguir tres momentos esenciales: la fecha de la recepción de la notificación, la fecha en que la notificación se entiende realizada y la fecha inicial del cómputo del plazo.

Estas notificaciones son remitidas utilizando la plataforma LexNET, y normalmente se remiten y reciben de modo instantáneo, aunque la ley distingue si fueron remitidas antes o después de las 15,00 horas.

En este caso, si la notificación es remitida antes de las 15,00 horas, se entiende recibida ese mismo día. Esta fecha de recepción debe constar en la notificación.

Si es remitida después de las 15,00 horas, se entiende recibida el día hábil siguiente.

En ambos casos, la notificación se entenderá realizada al día hábil siguiente de la recepción.

El inicio del cómputo del plazo comenzará a correr, con arreglo al art. 133.1 LEC, el día siguiente a la realización de la comunicación (40) .

En cuanto a la fecha final del cómputo de plazo, debe tenerse en cuenta en todos los supuestos el art. 135. 5 LEC, que permite la presentación del escrito perentorio hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo.

b) Comunicaciones dirigidas al Ministerio Fiscal

Se les aplicará el mismo régimen jurídico, salvo que la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre estableció en su apartado 1.º: «Transitoriamente, hasta el 1 de enero de 2018, en relación con los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, el plazo que se establece en el art. 151.2 será de diez días naturales».

Dicho plazo ha sido prorrogado hasta el 1 de enero de 2020 por la Ley 12/2017, de 28 de diciembre, que establece en su artículo único: «Hasta el 1 de enero de 2020, en relación con los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, el plazo que se establece en el art. 151.2 será de diez días naturales».

Ello supone que el inicio del cómputo de los plazos procesales respecto de las notificaciones efectuadas al Ministerio Fiscal se dilata diez días más (41) , pero debe tenerse en cuenta que por prescripción de dichas normas, los 10 días de prórroga son naturales, lo que incluye los festivos y los sábados, incluso los días del mes de agosto.

Al Ministerio Fiscal se le aplicará también el art. 135.5 LEC en cuanto a la fecha final para el cómputo en la presentación de escritos sujetos a plazo.

c) Comunicaciones efectuadas a abogados, graduados sociales y las efectuadas por sede judicial electrónica

A estas comunicaciones electrónicas se les aplica el art. 162.2 LEC, y se efectúan a los abogados y graduados sociales a través de la plataforma LexNET, y a personas jurídicas y entidades sin personalidad a través de la sede judicial electrónica, utilizando el servicio de notificación electrónica del Ministerio de Hacienda.

El acuerdo no jurisdiccional de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, al que ya hemos aludido, y la jurisprudencia de dicha Sala establecen el sistema de cómputo de plazos en estas notificaciones realizadas por LexNET, a las que hay que equiparar las realizadas por sede judicial electrónica, de acuerdo al art. 11.2 Real Decreto 1065/2015.

En estos supuestos, la notificación se deposita en el buzón electrónico, y es el destinatario el que debe proceder a su apertura en plazo de tres días, estableciendo la ley distinto tratamiento jurídico en función de que se proceda a su apertura, la fecha de ésta, y el caso de que no se abra en dicho plazo de tres días.

Estas notificaciones presentan una notable diferencia temporal entre la fecha de la remisión y la fecha de su recepción por el destinatario. Debemos considerar como la primera fecha relevante la

de su recepción, tal como hemos establecido a lo largo de este artículo.

Una vez recibida la comunicación, puede que el destinatario la abra, lo que puede efectuar en los tres días hábiles posteriores a la fecha de su recepción. En este caso, la notificación se entiende realizada el día hábil siguiente, y el inicio del cómputo se producirá el primer día hábil posterior (42) .

En cambio, si no la abre en el plazo de los tres días posteriores a su recepción, se produce la notificación.

El auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 10425/2017, de 25 de octubre establece: «en este caso, los plazos para desarrollar actuaciones impugnatorias comenzarán a computarse desde el día siguiente al tercero, todos ellos hábiles».

De ello parece deducirse que en el caso de que no se abra el buzón en los tres días posteriores a la recepción de la notificación, el inicio del cómputo del plazo empieza el cuarto día hábil, con lo que se marca una diferencia importante con el supuesto anterior, en el que existe un día más en el cómputo, pues se distingue entre la fecha de la apertura del buzón, de la notificación y del inicio del plazo.

En cambio, si no se abre el buzón al tercer día, el cuarto comenzará el cómputo del plazo (43) .

A mi juicio, debería haberse adoptado un criterio más homogéneo en ambos supuestos, y considerar que el cuarto día es el de la notificación, y el quinto día el de inicio del cómputo de plazo.

No obstante, estos criterios deberán de ir progresivamente siendo fijados por la jurisprudencia, y por la constante y necesaria evolución en los medios tecnológicos y en las normas jurídicas que le sirvan de soporte legal.

NOTAS

- (1) Podemos exponer brevemente dos supuestos. El art. 273.3 LEC obliga a los notarios y registradores a relacionarse con la Administración de Justicia de forma electrónica, pero ello aún no es posible por no existir medios tecnológicos adecuados de interrelación. El acceso al procedimiento judicial electrónico por profesionales personados debería hacerse mediante un servicio electrónico de acceso restringido (art. 11.2 e y 41 Ley 18/2011), pero dicho acceso no se ha desarrollado aún.

[Ver Texto](#)

- (2) Debemos recordar que las competencias en los medios materiales y los funcionarios de la Administración de Justicia (salvo los Letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal) están en su mayoría transferidas a las Comunidades Autónomas, y que el impulso en digitalización de la Administración de Justicia encabezado por el Ministerio de Justicia afecta solo a las Comunidades no transferidas.

[Ver Texto](#)

- (3) Extraído de LUZÓN CUESTA, en su obra: *Compendio de Derecho Penal. Parte general*. Dykinson S.L. 3.ª edición. Página 217.

[Ver Texto](#)

- (4) Debemos entender que los términos «firma electrónica reconocida» y «firma electrónica cualificada» son equivalentes. Este cambio de denominación obedece a haberse aprobado el Reglamento UE n.º: 910/2014, de 23 de julio y del Consejo que utiliza la expresión «firma electrónica cualificada», y que se recoge ya en el Real Decreto LexNET, que es de diciembre de 2015, posterior a dicho Reglamento.

[Ver Texto](#)

- (5) La firma electrónica reconocida es definida en Anexo Ley 18/2011, siguiendo al art. 3 de la Ley de Firma

electrónica, y es aquella permite: identificar al firmante, verificar la integridad del documento firmado, garantizar el no repudio en origen, contar con la participación de un tercero de confianza, estar basada en un certificado electrónico reconocido y ser generada por un dispositivo seguro de creación de firma.

[Ver Texto](#)

- (6) El art. 14 Ley 18/2011, establece: «La Administración de Justicia admitirá, en sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y resulten adecuados para garantizar la identificación de los firmantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos».

[Ver Texto](#)

- (7) Para ello, se ha creado una aplicación denominada «Visor Horus» donde se integran secuencialmente ordenadas todas las actuaciones definitivas, desde la demanda con sus documentos, las vistas grabadas, los escritos y resoluciones procesales, etc. Que esto sea el expediente judicial electrónico y no otra herramienta informática, como el sistema de gestión procesal, no hay ninguna norma que lo establezca, aunque pueda ello deducirse del conjunto de normas que lo regulan, especialmente las que se refieren a la necesidad de integridad, autenticidad y carácter definitivo de las actuaciones procesales.

[Ver Texto](#)

- (8) Dicho colectivo profesional ha sido el primero en incorporarse a la presentación telemática de escritos y documentos, y su conocimiento de dichos medios es muy destacado.

[Ver Texto](#)

- (9) La Exposición de Motivos de la Ley 18/2011 utiliza el término seguridad de manera reiterada. Por poner un ejemplo, en su Preámbulo, Exponiendo I en su último párrafo dispone: «La presente Ley regula el uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Los principales objetivos de esta norma, son: primero, actualizar el contenido del derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas, gracias a la agilización que permite el uso de las tecnologías en las comunicaciones; segundo, generalizar el uso de las nuevas tecnologías para los profesionales de la justicia; tercero, definir en una norma con rango de ley el conjunto de requisitos mínimos de interconexión, interoperabilidad y seguridad necesarios en el desarrollo de los diferentes aplicativos utilizados por los actores del mundo judicial, a fin de garantizar la seguridad en la transmisión de los datos y cuantas otras exigencias se contengan en las leyes procesales».

[Ver Texto](#)

- (10) No obstante, en la actualidad y sin perjuicio del peligro que anotamos, nos encontramos en una fase intermedia en el que el acceso electrónico por los ciudadanos y profesionales al expediente digital no está desarrollado mediante herramientas informáticas, y por ello, el cumplimiento del deber de información es a veces muy dificultoso.

[Ver Texto](#)

- (11) Dicho precepto establece: «Profesionales de la justicia: profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia. En concreto, Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Cuerpo de Abogados del Estado, Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas y Letrados del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, así como los Colegios de Procuradores. También tendrán la consideración de profesionales de la justicia a estos efectos los administradores concursales».

No obstante, la disposición transitoria tercera de este Real Decreto establece que los administradores concursales no tendrán obligación de utilizar este sistema electrónico hasta que se produzca el correspondiente desarrollo reglamentario.

[Ver Texto](#)

- (12) No obstante, en la actualidad dicha obligación de uso se extiende a todas las jurisdicciones, salvo la penal.

[Ver Texto](#)

- (13) Dicha disposición establece: «Por otra parte, las previsiones relativas al archivo electrónico de apoderamientos *apud acta* y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los

sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos anteriormente indicados, entrarán en vigor el 1 de enero de 2017».

[Ver Texto](#)

- (14) Dispone el art. 273.3 LEC: «En todo caso, estarán obligados a intervenir a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia, al menos, los siguientes sujetos:

- a) Las personas jurídicas.
- b) Las entidades sin personalidad jurídica.
- c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional.
- d) Los notarios y registradores.
- e) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia.
- f) Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su cargo».

[Ver Texto](#)

- (15) El art. 9 Ley 18/2011 establece: «La sede judicial electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las Administraciones competentes en materia de justicia». Fue creada por Ministerio de Justicia por ORDEN JU/1126/2015, de 10 de junio.

Además, podrá habilitarse el Servicio del Ministerio de Hacienda a que se refiere el art. 8.2 y 9.2 Real Decreto 1065/2015 LexNET. No obstante, en la actualidad la presentación de escritos solo está habilitada a través de la sede judicial electrónica.

[Ver Texto](#)

- (16) El art. 273.4 LEC dispone: «Únicamente de los escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o ejecutado, se deberá aportar en soporte papel, en los tres días siguientes, tantas copias literales cuantas sean las otras partes».

[Ver Texto](#)

- (17) Dicho auto establece expresamente: «no existe ningún defecto en la presentación de los documentos en los que basaba su petición inicial del procedimiento monitorio; que tales documentos son los requeridos a tenor de los artículos que regulan dicho procedimiento y constituirían el principio de prueba exigible a tenor del artículo 812 y siguientes de la LEC; que no se aportaron fotocopias sino imágenes digitalizadas de tales documentos; y que estas imágenes digitalizadas se presentaron por vía electrónica, de conformidad con el artículo 172 y concordantes de la LEC».

[Ver Texto](#)

- (18) El apartado 5 del Anexo IV de dicho Real Decreto dispone: «El escrito o documento principal del envío deberá ser presentado en el formato PDF/A con la característica OCR (reconocimiento óptico de caracteres), es decir, deberá haber sido generado o escaneado con software que permita obtener como resultado final un archivo en un formato de texto editable sobre cuyo contenido puedan realizarse búsquedas y deberá ir firmado electrónicamente con la firma o firmas de los profesionales actuantes».

[Ver Texto](#)

- (19) El apartado 6, párrafo quinto, del Anexo IV de dicho Real Decreto establece: «Los documentos adjuntos deberán remitirse individualizados en tantos archivos digitales como documentos sean los que deban componer el envío. No es posible remitir un único pdf que contenga todos los documentos».

[Ver Texto](#)

(20)El apartado 6, párrafo sexto, del Anexo IV de dicho Real Decreto preceptúa: «En el momento de su generación en el proceso de escaneado, los documentos serán nombrados de forma descriptiva. El nombre deberá ir precedido del número cardinal correspondiente al lugar u orden que ocuparán al ser anexados o adjuntados en el envío a realizar. Deberá incluirse su clase y breve descripción, sin que sirva únicamente una alusión genérica o numeral». La catalogación la ofrece la Resolución de 15 de septiembre de la Secretaría General de la Administración de Justicia (BOE 17 de septiembre de 2015).

[Ver Texto](#)

(21)El art. 273.5 LEC dispone: «El incumplimiento del deber del uso de las tecnologías previsto en este artículo o de las especificaciones técnicas que se establezcan conllevará que el secretario judicial conceda un plazo máximo de cinco días para su subsanación. Si no se subsana en este plazo, los escritos y documentos se tendrán por no presentados a todos los efectos».

[Ver Texto](#)

(22)En la Ley 18/2011 se alude solo al incumplimiento del deber de uso de las tecnologías.

[Ver Texto](#)

(23)A solución contraria llega la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 12 de diciembre de 2017, anteriormente citada, pues considera que no es necesaria la firma electrónica de los documentos anexos a la demanda, afirmando que: «Por su parte, el punto 4 del citado artículo 273 de la LEC detalla la forma de presentación de los escritos y documentos por vía electrónica, indicando que deben ir debidamente foliados mediante un índice electrónico que permita su debida localización y consulta y que la presentación se realizará empleando firma electrónica reconocida, de lo que cabe deducir que es este índice el que debe ir debidamente firmado electrónicamente, pues la firma de los documentos contractuales digitalizados, por parte de quien ni es fedatario público ni es parte en tales documentos supondría introducir a un tercero ajeno a su contenido negocial».

A mi juicio la sentencia confunde en este punto la firma electrónica de un documento (por ejemplo, contrato electrónico, que estará firmado solo por los contratantes), con la firma electrónica reconocida del presentante, que ha de poner a los documentos que acompañan la demanda, que es garantía de seguridad e integridad de lo enviado, y exigida por los art. 267 y 268 LEC, y que en modo alguno supone la introducción de un tercero ajeno, pues el presentante: abogado o procurador, no hace con su firma suyo el documento, sino que lo dota de inmodificabilidad desde que lo firma y lo envía.

[Ver Texto](#)

(24)Este artículo proclama: «La presentación se realizará empleando firma electrónica reconocida y se adaptará a lo establecido en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia».

[Ver Texto](#)

(25)Un conjunto normativo muy extenso permite esta deducción (art. 230 LOPJ; arts. 8, 21, 33, 34, 35, 37.3 Ley 18/2011; arts. 3, 5, 11, 21, 22, 23, 24, 25, Disposición final cuarta Real Decreto 1065/2015; arts. 152.2, 162 LEC: Disposición final duodécima Ley 42/2015).

[Ver Texto](#)

(26) Debemos aclarar como apuntábamos al inicio de este trabajo, que existen colectivos aludidos en el art. 273.3 LEC a los que no se les puede exigir ni la presentación electrónica de escritos, ni se puede realizar comunicación electrónica alguna, por no estar desarrollado el sistema electrónico de relación con los mismos: notarios y registradores, funcionarios de las Administraciones Públicas.

[Ver Texto](#)

(27)El art. 152.2 LEC establece: «Los actos de comunicación se practicarán por medios electrónicos cuando los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia conforme al artículo 273, o cuando aquéllos, sin estar obligados, opten por el uso de esos medios, con sujeción, en todo caso, a las disposiciones contenidas en la normativa reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia».

El art. 153.3 4.º: «En todo caso, por el personal al servicio de la Administración de Justicia, a través de medios telemáticos, cuando se trate del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado, de los Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, si no tuvieran designado procurador».

Art. 162.1: «Cuando las oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación estén obligados a enviarlos y recibirlos por medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, o cuando los destinatarios opten por estos medios, los actos de comunicación se efectuarán por aquellos, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda».

[Ver Texto](#)

(28) Debe tenerse en cuenta que el proceso de incorporación de las distintas Administraciones Públicas es progresivo, sobre todo, en lo que atañe a los Ayuntamientos.

[Ver Texto](#)

(29) También puede ser objeto de duda lo que haya de entenderse por asuntos que se inicien a partir de esa fecha. La interpretación más empleada en el foro, es que un asunto se inicia cuando se dicta la primera resolución en el mismo, por lo que no habrá de atenderse a la fecha de su presentación, sino a la fecha que se dicta el primer proveído.

[Ver Texto](#)

(30) En dicho error incurre la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León de 02/09/2017, que ante una notificación a una persona jurídica por sede electrónica, considera que el hecho de que dicha persona jurídica no retirara la notificación supone su rechazo, e impide que dicha comunicación sea válida. Lógicamente, dicha sentencia no ampara dicha decisión en ningún precepto legal.

[Ver Texto](#)

(31) DE LAMO RUBIO, Jaime: «La sede judicial electrónica y los derechos del trabajador en caso de empresas desaparecidas» *Diario LA LEY*, n.º 9037, Sección Tribuna, 8 de septiembre de 2017.

[Ver Texto](#)

(32) Por ejemplo, en este caso, una notificación enviada el lunes a las 16,00 horas tendrá tres momentos relevantes: remisión el lunes, recepción el martes, realización el miércoles. Partimos de la hipótesis que se trata de días hábiles.

[Ver Texto](#)

(33) Art. 133.1 LEC: «Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo».

[Ver Texto](#)

(34) Los Colegios de Procuradores tiene la categoría de profesionales de la justicia del art. 2 b) Real Decreto 1065/2015, y figuran en dicho decreto en la relación de usuarios de LexNET en el Anexo II.

[Ver Texto](#)

(35) Dispone este párrafo: «Se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando en la diligencia quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona, en el domicilio, en la dirección electrónica habilitada al efecto, por comparecencia electrónica o por los medios telemáticos o electrónicos elegidos por el destinatario».

[Ver Texto](#)

(36) Es precisamente este supuesto el que más dudas presenta en torno a cuándo ha de entenderse realizada

la notificación si el destinatario no abre el buzón. Es esencial el acuerdo no jurisdiccional del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 6 de julio de 2016 que entiende que la notificación se produce ese tercer día hábil, aunque el destinatario no la abra. Dicho acuerdo es seguido por la jurisprudencia de esta Sala.

[Ver Texto](#)

(37)El art. 182.2 LOPJ establece: «Son horas hábiles desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, salvo que la ley disponga lo contrario».

[Ver Texto](#)

(38)Pese a lo dispuesto en el art. 130.4 LEC que permite reglas especiales para las actuaciones electrónicas, la legislación no ha desarrollado este supuesto, por lo que no existen días y horas hábiles especiales para estas actuaciones electrónicas.

[Ver Texto](#)

(39)El *ATS 10425/2017 de 25 octubre 2017 manifiesta*: «En cuanto a las notificaciones a través del servicio de los Colegios de Procuradores ; cuando un acto o resolución judicial se notifique por el Juzgado o Tribunal a través del servicio organizado por los Colegios de Procuradores, se aplicará el régimen procesal común propio de estas notificaciones, y en consecuencia, se tendrán por notificados al día siguiente a la fecha de su recepción.

En cuanto a las notificaciones a través de LexNet en los demás supuestos:

A) Cuando haya constancia de la correcta remisión del acto de comunicación y transcurran tres días hábiles sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada con plenos efectos procesales. En este caso los plazos para desarrollar actuaciones impugnatorias comenzarán a computarse desde el día siguiente al tercero, todos ellos hábiles.

B) Si se accede al contenido el día de su remisión o durante los tres días hábiles posteriores, la notificación se entiende realizada al día siguiente de dicho acceso. De este modo, si se accede el día tercero, la notificación se entiende realizada el cuarto día hábil y los plazos comienzan a computar desde el quinto».

[Ver Texto](#)

(40)Si ponemos un ejemplo práctico, la notificación sería como sigue:

1) Notificación enviada por LexNET 05/03/2018 (lunes), a las 10,00 de la mañana:

- Enviada/recibida... 05/03/2018
- Realizada... 06/03/2018
- Inicio cómputo plazo... 07/03/2018

2) Notificación enviada por LexNET 05/03/2018 (lunes), a las 16,00 de la tarde:

- Enviada ... 05/03/2018
- Recibida... 06/03/2018
- Realizada.... 07/03/2018
- Inicio cómputo plazo... 08/03/2018

[Ver Texto](#)

(41)Si ponemos un ejemplo similar al anterior, la notificación al Ministerio Fiscal sería como sigue:

3) Notificación enviada por LexNET 05/03/2018 (lunes), a las 10,00 de la mañana:

- Enviada/recibida... 05/03/2018
- Realizada... 15/03/2018 (contamos diez días naturales desde el 06/03/2018)
- Inicio cómputo plazo... 16/03/2018

4) Notificación enviada por LexNET 05/03/2018 (lunes), a las 16,00 de la tarde:

- Enviada ... 05/03/2018
- Recibida... 06/03/2018
- Realizada... 16/03/2018, viernes.(contamos diez días naturales desde el 07/03/218)
- Inicio cómputo plazo... 20/03/2018 (17 y 18 de marzo son inhábiles por ser sábado y domingo, y partimos de que en la CCAA el 19 de marzo es festivo por ser día de San José).

[Ver Texto](#)

(42)En este supuesto, si la notificación se remite el 05/03/2018, y se recibe al día siguiente:

1) Si abre el buzón el 06/03/2018:

- Notificación realizada:... 07/03/2018
- Inicio del cómputo... 08/03/2018

2) Si abre el buzón el 07/03/2018:

- Notificación realizada:... 08/03/2018
- Inicio del cómputo... 09/03/2018

3) Si abre el buzón el 08/03/2018:

- Notificación realizada:... 09/03/2018
- Inicio del cómputo... 12/03/2018 (pues el 10 y 11 de marzo son sábado y domingo)

4) Si abre el buzón el 09/03/2018

- Notificación realizada:... 12/03/2018 (pues el 10 y 11 de marzo son sábado y domingo)
- Inicio del cómputo... 13/03/2018

[Ver Texto](#)

(43)Con arreglo a este criterio si la notificación se recibe el 06/03/2018, los tres días hábiles posteriores para la apertura del buzón se agotan el 09/03/2018 (viernes), y el inicio del cómputo del plazo se produce el día hábil siguiente, que es el 12/03/2018 (lunes).

[Ver Texto](#)